

Enero 13 de 1959

86ª REUNION — 15ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia de los doctores JOSE MARIA GUIDO y BENJAMIN GUZMAN, presidente provisional y vicepresidente 1º del Honorable Senado, respectivamente

Prosecretarios: señores NOE JITRIK y CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

SENADORES PRESENTES:

ARANA, Tomás Pedro
BERTIN, Alfredo Felipe
BIAIN, Pablo
CALDERON, Segundo Rosa
CANEQUE, Francisco E.
CIARLOTTI, Pedro Antonio
DE LLAMAS, Enrique V.
DÍAZ, Juan Luis
FALCO, Clodomiro
FIGUEROA, Héctor E.
FITTIPALDI, Juan Pablo
GARCIA, Alfredo
GOMEZ, Carlos Bernabé
GUIDO, José María
GUZMAN, Benjamín
ITURRALDE, Antonio
JUAREZ, José Gregorio
MALLEVILLE, Julio A.
MANSILLA, Juan Argentino
NOGUEIRA, Eduardo
PARRA PEREZ, Diego
PEREZ, Bartolomé
RACEDO, Lucio E.
RICA, Diego Isidro
ROCHA ERRECART, Adolfo
SANCHEZ, Franklin Alberto
TURANO, Armando Luis
VERA BARROS, Pedro César
VILCHEZ, Martín

AUSENTES, CON AVISO:

BAYOL, Augusto G.
BAZAN, Eduardo
DAVILA, J. Aníbal
FERNANDEZ BESCHTEDT, Horacio
FLEITAS, Victor Hugo
GALLO, Victorio Manuel
LEAVY, Napoleón Tomás
LEBRERO, Carlos Alberto
MELANI, Francisco José
TRUNSKY, Salomón
VILLALBA, Lucas

AUSENTES, CON LICENCIA:

BÉRTORA, José María Antonio
WEIDMANN, Rodolfo A.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 3050.)
- 2.—Asuntos entrados:
 - I.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 3050.)
 - II.—Despachos de comisiones. (Página 3051.)
- 3.—Proyecto de comunicación del senador Díaz sobre reglamentación de la ley 14.770, disponiendo la creación de la Junta Nacional del Algodón. (Página 3051.)

4.—Proyecto de resolución del senador **García** sobre creación de una comisión bicameral para estudiar el problema de la extracción, transporte, distribución, comercialización e industrialización del pescado. (Página 3051.)

5.—A moción del senador **Díaz** se resuelve tratar sobre tablas el proyecto de comunicación a que se refiere el punto 3 de este sumario. (Página 3051.)

6.—Consideración del proyecto de comunicación a que se refiere el punto 3 de este sumario. Se aprueba. (Página 3053.)

7.—A moción del senador **García** se resuelve tratar sobre tablas el proyecto de resolución a que se refiere el punto 4 de este sumario. (Página 3053.)

8.—Consideración del proyecto de resolución a que se refiere el punto 4 de este sumario. Se aprueba con modificaciones. (Página 3054.)

9.—Consideración del despacho de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre modificación de la ley de aduanas. Se aprueba. (Página 3055.)

10.—Asunto entrado:

III.—Despacho de comisión. (Página 3066.)

11.—Consideración del despacho de las comisiones de Industria, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se aprueba el contrato a que se refiere el decreto 10.633/58, celebrado con la empresa AN-SEC. Se aprueba. (Página 3066.)

12.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre escalafón para el personal de la administración nacional. Se aprueba. (Página 3074.)

13.—A moción del senador **Rica** se autoriza a la Presidencia para designar a los senadores que integrarán la comisión bicameral encargada de estudiar las medidas pertinentes para enjugar el déficit de explotación de la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino. (Página 3082.)

14.—A moción del senador **Cañeque** se resuelve citar a sesión para el día miércoles 14, a las 16. (Página 3083.)

15.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado. (Página 3083.)

II.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 3083.)

III.—Inserción. (Página 3084.)

—En Buenos Aires, a los trece días del mes de enero de 1959, a la hora 16 y 35:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. **Biain**. — Pido la palabra.

Sr. **Presidente** (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. **Biain**. — Como entiendo que hay número suficiente en la casa, hago indicación de que se continúe llamando hasta lograr quórum.

—Asentimiento.

Sr. **Presidente** (Guido). — Habiendo asentimiento, se continuará llamando.

—A la hora 19 y 50, dice el

Sr. **Presidente** (Guido). — La sesión está abierta.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. **Presidente** (Guido). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

Sr. **Prosecretario** (Jitrik). — La Honorable Cámara de Diputados comunica la sanción definitiva de los siguientes proyectos de ley que le fueran pasados en revisión: sobre convenio entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sobre Convenio de Intercambio Compensado Argentino-venezolano (1).

Sr. **Presidente** (Guido). — A sus antecedentes.

Sr. **Prosecretario** (Jitrik). — La misma Cámara comunica que ha tenido a bien aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre modificación al régimen impositivo nacional, el que queda así definitivamente sancionado (2).

Sr. **Presidente** (Guido). — A sus antecedentes.

Sr. **Prosecretario** (Jitrik). — También comunica que ha designado a los señores diputados Melchor S. Posse, Antonio C. P. Sirena y Cándido Tello Rosas para integrar la Comisión Especial bicameral encargada de estudiar las medidas pertinentes para enjugar el déficit de explotación de los Ferrocarriles del Estado Argentino.

Sr. **Presidente** (Guido). — A sus antecedentes.

(1) y (2) Véase el Apéndice.

la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La verdad es que la radicación de este grupo electrógeno juega, en cierta manera, con el plan de desarrollo energético que ha puesto en funcionamiento la provincia de Buenos Aires y por el cual se prevé la inversión de 4.000 millones de pesos en el término de cuatro años. Este plan energético supone en la provincia de Buenos Aires, entre otras obras, la construcción de un anillo que tomaría como base Morón, San Nicolás, Buenos Aires, Pehuajó, Junín, Chivilcoy, Mercedes y Luján. Quiere decir que al comenzar a fluir la energía eléctrica dentro de este anillo, no se beneficiará exclusivamente la zona del Gran Buenos Aires, sino que abarcaría también la zona Noroeste de la provincia de Buenos Aires; y todo esto en vistas a un futuro plan regulador del desarrollo energético del país, ya que nosotros también tendremos que llegar, como lo han hecho las naciones más avanzadas en esta materia, a producir el anillado de todos los sistemas de energía eléctrica del país, incluso para compensar desniveles de rendimiento que puedan tener las centrales hidroeléctricas, que a veces juega equilibradamente con las plantas de producción termoeléctrica.

De ahí, señor presidente, que, como representante de la provincia de Buenos Aires, entiendo y comprendo la angustia y el problema que vive el resto de las provincias argentinas. Como hombre de la provincia de Buenos Aires considero que este tremendo desarrollo que ha sufrido esta zona del país que se llama Gran Buenos Aires ha sido hecho, incluso, a expensas de la traslación de bienes y riquezas que ha producido la totalidad de la Nación Argentina.

No creo que este acto lesione ese principio; pienso, por el contrario, que está regido por la necesidad, incluso, de que esta planta funcione dentro de un ambiente capaz de consumir el total de la energía eléctrica que va a producir. Las provincias van a contar con el apoyo no solamente de los senadores de la provincia de Buenos Aires, sino también de su gobierno, para todo plan de expansión de energía hidroeléctrica que tienda a conformar una unidad nacional —vamos a decir así— en el desarrollo de las fuentes energéticas del país. Nada más. *(Aplausos en las bancas.)*

Sr. Presidente (Guido). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de las comisiones.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Guido). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se hará

la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo.

12

ESCALAFON PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

Sr. Presidente (Guido). — Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre aplicación del escalafón para el personal de la administración nacional y disposiciones relativas al presupuesto general de la Nación.

Por Secretaría se dará lectura al despacho de la comisión.

Sr. Prosecretario (Jitrik). — *(Leyendo):*

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley, en revisión, autorizando al Poder Ejecutivo para aplicar el escalafón correspondiente al personal civil de la administración pública nacional y sobre disposiciones relativas al presupuesto general para el ejercicio 1958/59; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del reglamento, el presente despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 13 de enero de 1959.

Juan Luis Díaz. — Juan Argentino Mansilla. — Clodomiro Falco. — Armando Luis Turano.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(Enero 9 de 1959)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Al solo efecto de posibilitar su vigencia desde el 1º de noviembre de 1958, autorizase al Poder Ejecutivo para que aplique el escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, aprobado por el decreto 9.530 del 7 de noviembre de 1958, y ratifíquense el artículo 10 de dicho decreto y los puntos 26, 27, 43 y 44 del escalafón instituido por el mismo.

Asimismo quedan autorizados los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional para elaborar y aplicar un escalafón para los agentes del Poder Legislativo, y para reestructurar

el presupuesto del anexo Congreso de la Nación correspondiente al ejercicio 1958/59, debiendo el Poder Ejecutivo incorporar esta reestructuración al presupuesto general.

Art. 2º — El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar una nueva escala de remuneraciones y denominación de los empleos del personal al servicio del Estado, substituyendo o readaptando la que se halla en vigencia por el artículo 11 de la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto, edición 1943), reemplazado por el artículo 23 del decreto ley 23.573/56. El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de lo que dispusiere en uso de la facultad que se le acuerda.

Art. 3º — El Poder Ejecutivo, mediante compensación de las autorizaciones totales que contengan los presupuestos en vigor, arbitrará los créditos necesarios para posibilitar la aplicación del escalafón a que se refiere el artículo 1º, quedando facultado para incorporar en dichos presupuestos, con cargo a los recursos respectivos, créditos en la medida que sea estrictamente indispensable para alcanzar los niveles que no puedan lograrse por vía de aquellas compensaciones.

Art. 4º — Con efecto a partir del 1º de noviembre de 1958, el Poder Ejecutivo podrá acordar al personal comprendido en el presupuesto general de la administración, no incluido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional en virtud de lo establecido en los apartados c), e), f), h), k) y l) del artículo 2º del citado cuerpo legal, los beneficios que instituye el punto 26 del escalafón aprobado por el decreto 9.530/58.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo modificará y adaptará los plazos y fechas que contiene el decreto ley 16.990/57, de presupuesto general de la administración nacional para 1957/58, y sus complementarios 5.945/58, 5.965/58 y 6.285/58, cuyas partes dispositivas tienen aplicación durante el curso del ejercicio 1958/1959.

Art. 6º — Fíjase en la suma de un mil millones de pesos moneda nacional (\$ 1.000.000.000) el crédito de emergencia para el ejercicio 1958/1959, correspondiente a la parte del presupuesto de gastos que se atienden con recursos de rentas generales.

Dicho crédito podrá destinarse durante el ejercicio a reajustar cualquiera de las partidas contenidas en los anexos de esa parte del presupuesto, sea cual fuere el régimen que regule la forma de incrementación de las mismas, siempre que tales anexos no admitan compensaciones internas que permitan resolver las insuficiencias producidas. El crédito de emergencia también podrá aplicarse en el ejercicio a la creación de nuevos conceptos de inversión.

Art. 7º — Facúltase al Poder Ejecutivo para introducir en el anexo «Servicios de la deuda

pública» las modificaciones y ampliaciones que fuesen necesarias para la normal atención de los servicios de intereses, amortización y demás gastos relativos a la deuda pública nacional, durante el ejercicio 1958/1959.

Art. 8º — Establécese en la suma de un mil millones de pesos moneda nacional (\$ 1.000.000.000) el monto máximo que el Poder Ejecutivo podrá anticipar a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con fondos del Tesoro nacional, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1959, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 14.070, para atender los respectivos planes de obras y trabajos públicos. Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para entregar a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con cargo de reintegro, las sumas que requieran para cubrir los déficit que irroguen las ejecuciones de sus presupuestos correspondientes al año 1959.

El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del crédito público en la medida necesaria para atender esos anticipos y entregas de fondos.

El presente artículo substituye el segundo párrafo del artículo 11 del decreto ley 16.990/57.

Art. 9º — El Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, creado por el decreto ley 2.004/55, será aplicado para la atención de las finalidades a que se refiere dicho decreto ley y sus modificatorios 9.875 y 10.487/57.

Art. 10. — Deróganse los incisos b) del artículo 15 del decreto 13.126/57; c) del artículo 14 del decreto ley 13.128/57; c) del artículo 13 del decreto ley 13.129/57, y h) del artículo 16 del decreto ley 13.130/57. A efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley de contabilidad, el Poder Ejecutivo, previa su aprobación, incorporará, al presupuesto general de la administración nacional correspondiente al ejercicio 1958/1959, los presupuestos administrativos de las respectivas entidades descentralizadas.

Art. 11. — Substitúyese a partir del 1º de noviembre de 1958 el texto del artículo 33 de la ley 11.672 (complementaria permanente del presupuesto, edición 1943), modificado por el decreto ley 5.169/58, por el siguiente:

Artículo 33. — Para la atención de los gastos que por disposición legal deben cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo emitirá anualmente, con mención de las leyes que faculden su emisión, la cantidad necesaria de títulos de deuda pública interna o externa, que serán amortizados mediante sorteo a la par, cuando la cotización sea a la par o sobre la par, y licitación o compra cuando la cotización sea abajo de la par,

pudiendo realizar asimismo las operaciones de financiación transitoria que resulte necesaria, inclusive con el Banco Central de la República Argentina y demás instituciones bancarias oficiales mediante la utilización por parte de éstas de fondos que obtengan de préstamos o colocaciones provenientes del exterior. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, facúltase a dichas instituciones bancarias para celebrar con el gobierno nacional los convenios respectivos, en forma independiente y al margen de las otras operaciones de crédito que puedan realizar con dicho gobierno, de acuerdo con las autorizaciones y limitaciones contenidas en las cartas orgánicas correspondientes.

Art. 12. — Facúltase al Poder Ejecutivo para tomar a su cargo el quebranto producido hasta el 31 de diciembre de 1958 en la gestión de la Caja Nacional de Ahorro Postal, como consecuencia de las medidas de ordenamiento bancario dispuestas por el decreto ley 13.125/57, a cuyo efecto realizará las operaciones de crédito que corresponda.

Art. 13. — Autorízase al Poder Ejecutivo para que, frente a la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, reduzca funciones o empleos de la administración pública nacional (administración central, servicios de cuentas especiales, organismos descentralizados, empresas del Estado, obras sociales y plan de trabajos públicos), en la medida que estime compatible con el adecuado funcionamiento de los servicios.

Dicha reducción se operará mediante la aplicación de los siguientes procedimientos:

- a) Limitación de servicios del personal que sea titular de una jubilación ordinaria o prestación similar;
- b) Prescindir de los servicios de quienes reúnan los extremos necesarios para acogerse a la jubilación ordinaria, quedando autorizados los organismos provisionales respectivos para abonarles —con carácter de anticipo y hasta tanto se determine el haber jubilatorio respectivo— el ochenta por ciento del probable monto de pasividad. Dicho anticipo comenzará a abonarse dentro de los sesenta días del cese del agente;
- c) Aplicación de un régimen que reduzca al mínimo la acumulación de cargos, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo modificará los regímenes en vigor;
- d) Prescindir de personal en la medida que sea necesario y de acuerdo con un sistema que ampare a los agentes de

más capacidad, ponderada mediante un régimen uniforme de calificaciones, y a igualdad de esa condición, a aquellos con mayores obligaciones familiares.

Los agentes que cesen en virtud de las disposiciones de este artículo tendrán derecho a una indemnización, que será graduada por el Poder Ejecutivo según las distintas condiciones del personal, enumeradas precedentemente, y la antigüedad en el servicio. Dicha indemnización, que no podrá ser inferior a tres meses de sueldo, se abonará en cuotas mensuales.

Las vacantes producidas serán eliminadas automáticamente de los presupuestos, y el importe de las mismas se destinará al pago de las indemnizaciones precedentemente establecidas.

Cuando mediaren razones de interés nacional o impostergables necesidades de servicio, el Poder Ejecutivo podrá disponer excepciones a lo previsto en los puntos a) y b).

Las normas del presente artículo tendrán aplicación hasta el 31 de octubre de 1960, quedando en suspenso, durante dicho lapso, cualquier disposición legal que se le oponga.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.

Eduardo T. Oliver.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Díaz. — Señor presidente: por el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que tengo el honor de informar se aprueba el proyecto de ley en revisión cuyo articulado trata en su mayoría (artículos 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 10) de una serie de disposiciones destinadas a facilitar, actualizar y, en algunos casos, corregir, adaptándolas a ineludibles exigencias de los servicios que presta el Estado nacional, aquellas otras contenidas en el decreto ley 16.990 de 1957 —presupuesto general de la administración nacional, ejercicio 1957/58—, que, por imperio del artículo 13 de la ley de contabilidad y en razón de no haber aún considerado el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general para el ejercicio 1958/59, oportunamente remitido por el Poder Ejecutivo, rige para el presente ejercicio. Contiene, además, diversas autorizaciones referidas a la aplicación del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional y a la incorporación de los créditos indispensables a este fin (artículos 1º, 2º, 3º y 4º), y finalmente, algunas otras que hacen a la aplicación del fondo de restablecimiento económico nacional (artículo 9º), a las facultades de los directores de los bancos oficiales (artículo 10), al procedimiento de emisión de títulos de la deuda pública interna y externa (artículo 11), al déficit de

la Caja Nacional de Ahorro Postal (artículo 12) y a la reducción de los agentes de la administración pública mediante indemnización (artículo 13).

Este breve enunciado da idea de la verdadera importancia del presente proyecto y también de la urgencia de su consideración, si tenemos en cuenta la íntima dependencia que el mismo tiene con los planes de ordenamiento económico-financiero en que se halla empeñado en estos momentos el gobierno nacional, y con los propósitos, reiteradamente enunciados por este último, de obtener, mediante su eficaz reorganización, una administración pública moderna y científica, racionalmente remunerada y funcionalmente capaz.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, doctor Benjamín Guzmán.

Sr. Díaz. — Analizaré a continuación el alcance, por su orden, de cada uno de los artículos que integran esta iniciativa del Poder Ejecutivo, relacionándolos, en su caso, con las leyes vigentes de la materia de cada uno.

La primera parte del artículo 1º del proyecto autoriza la aplicación del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, que fuera aprobado por decreto 9.530 del 7 de noviembre próximo pasado, como corolario del informe elevado por la comisión especial creada para su estudio y redacción, según decreto 3.719 del 11 de agosto del mismo año, y ratifica el artículo 10 del decreto citado y los puntos 26, 27, 43 y 44 del escalafón instituido por el mismo.

Los legisladores tenemos conocimiento, señor presidente, de los esfuerzos realizados por los agentes de la administración pública, a través de sus organismos sindicales, para obtener un cuerpo jurídico de organización de su carrera administrativa que, a la vez que los ponga a cubierto de las contingencias que las fluctuaciones políticas determinan sobre ellos, les permita conocer cabalmente sus posibilidades dentro de los organismos que integran, en función de su capacidad, rendimiento y antigüedad. Sabemos también de la simpatía y comprensión que estos esfuerzos han despertado en la opinión pública, y, por otra parte, hace tiempo que venimos bregando en igual sentido, de forma tal que su aprobación, así como resulta un acto de verdadera justicia, implica, asimismo, la concreción de una de las aspiraciones de nuestra conciencia ciudadana, para el bien de un importante sector de la comunidad.

Esto, y no otra cosa, significa la autorización a otorgar al Poder Ejecutivo para que aplique —es decir, le dé vigencia plena de funcionamiento— el escalafón para el personal civil de la administración pública nacional.

La ratificación por ley del artículo 10 del decreto 9.530 de 1958 resulta imperiosa por existir en el artículo 3º del decreto ley 6.666, del 17 de junio de 1957, la prohibición implícita de designar personal en cargos superiores, ya que el mismo determina que a partir de la fecha en que fue dictado sólo podrá nombrarse personal en los cargos inferiores del presupuesto, y el artículo 10 autoriza, precisamente, aunque por razones especiales que hagan a la conducción de los planes de gobierno, y únicamente al Poder Ejecutivo, a designar personal jerárquico en la clase «A», grupo I y II, y al margen del régimen escalafonario que se establece en la clase «A» (grupo III, IV y V), «B», «C», «D», «E» y «F», siempre y cuando en este último caso sean creados los cargos pertinentes.

Las razones especiales invocadas, de verdadera importancia, y el hecho de que las demás disposiciones del artículo referido mantienen al personal así nombrado al margen del escalafón por un período de siete años, no hacen posible la promoción por antigüedad y determinan que sus designaciones no revisten el carácter de permanentes, justifican plenamente, a juicio de la comisión, que se apruebe la ratificación propuesta.

Los puntos 26 y 27 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional tratan de los subsidios por cónyuge y familiares, que se fijan en la suma de cuatrocientos pesos para el primer caso y de ciento cincuenta para los restantes, sin límite de sueldo.

No necesito decir por qué toda modificación presupuestaria requiere la aprobación del Congreso.

Los puntos 43 y 44 del mencionado escalafón determinan que funcionará una junta de calificaciones en cada repartición y que podrá prescindirse de los requisitos de edad (treinta años) y de antigüedad (diez años) para integrar aquéllas cuando no existan en el organismo correspondiente agentes que reúnan dichos mínimos. Estas dos disposiciones requieren fuerza de ley por ser modificatorias del artículo 43 del decreto ley 6.666 de 1957, en cuanto éste dispone una junta de calificaciones para cada ministerio u organismo perteneciente a la administración central, y exige obligatoriamente los mínimos de edad y antigüedad citados. Por lo demás, ambas contribuyen a facilitar el mecanismo de calificación creado por el estatuto y a extenderlo a todos los organismos del Estado.

El segundo párrafo del artículo 1º del presente proyecto, que está más estrechamente vinculado a los miembros del Parlamento, por referirse al presupuesto del anexo Congreso, y al personal de las distintas dependencias que lo integran, autoriza a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional a elaborar y aplicar un escalafón para los agentes del Po-

der Legislativo y a reestructurar el presupuesto correspondiente al ejercicio 1958/1959 del anexo citado.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor José María Guido.

Sr. Díaz. — Una razón de verdadera justicia y equidad informa la primera de las autorizaciones mencionadas, pues el artículo 6º del referido decreto 6.666 de 1957 —estatuto del personal civil de la administración pública nacional—, que textualmente dice: «Invítase al Poder Judicial a implantar en su jurisdicción el estatuto que se aprueba por el presente decreto ley y declárase al mismo de aplicación para el personal del Congreso Nacional, esto último hasta tanto se constituya el cuerpo legislativo de la Nación», ha colocado expresamente al personal de este poder, a partir del 1º de mayo del año pasado, al margen del estatuto y, por consiguiente, del escalafón, configurando con ello una real injusticia como consecuencia de no haber legislado aún al respecto el Poder Legislativo. Esta es la oportunidad que tenemos de hacerlo; así lo ha considerado la Honorable Cámara de Diputados y ése es, también, el criterio de la comisión, que ha despachado favorablemente la iniciativa en cuestión.

La autorización dada a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional para reestructurar el presupuesto del anexo Congreso de la Nación, con la obligación, por parte del Poder Ejecutivo, de incorporar esta reestructuración al presupuesto general, nace de la conveniencia de adecuar funcionalmente el presupuesto a las necesidades y servicios del Poder Legislativo, más claramente avaluados a través de la experiencia vivida en este período parlamentario de sesiones, y responde a la facultad de este último, tal como la tienen los distintos poderes, de estructurar el suyo.

Poner en marcha el escalafón, de una organización, uniformidad y generalidad desconocidas hasta la fecha en la administración pública, significa tener que renovar, substituyendo o adaptando, no sólo las denominaciones, sino también las remuneraciones de los empleos del personal, por cuyas razones el artículo 2º del proyecto en consideración faculta al Poder Ejecutivo en tal sentido, permitiéndole modificar las disposiciones del artículo 11 de la ley número 11.672 (complementaria permanente del presupuesto, edición 1943), reemplazado por el artículo 23 del decreto ley 23.573 de 1956, con la obligación de dar cuenta al Honorable Congreso de lo que dispusiere en uso de la facultad que se le acuerda; y el artículo 3º, por su parte, le autoriza a arbitrar los créditos necesarios, bien sea mediante compensación de las autorizaciones totales que contengan los

presupuestos en vigor, bien incorporando aquellos otros cuyos niveles no puedan obtenerse por vía de la compensación.

El artículo 4º dispone que el Poder Ejecutivo podrá acordar al personal no incluido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, en virtud de distintos incisos de su artículo 2º, los beneficios del punto 26 del escalafón aprobado por decreto número 9.530, de 1958. Se trata de beneficiar con la suma de \$ 400 por el cónyuge, y con la de \$ 150 por los padres y hermanos impedidos e hijos y hermanos menores de 18 años, en todos los casos a su cargo, a las personas que revistan en cargos de carácter político (inciso c), del servicio exterior (inciso e), comprendidas en la ley orgánica militar (inciso f), de seguridad y defensa (inciso h), incluidas en el Estatuto del Docente (inciso k) y otras diversas (inciso l).

El presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 1957/58, sancionado por el decreto 16.990 de 1957 y sus complementarios números 5.945, 5.965 y 6.285, de 1958, contiene diversos plazos y fechas vinculados a los artículos 3º y 9º de la ley de contabilidad que juegan para el período de su vigencia originaria; ahora bien, al entrar el mismo a regir en el ejercicio 1958/59, en razón de lo dispuesto por el artículo 13 de la ley de contabilidad, hácese necesario actualizar los plazos y las fechas para posibilitar su normal funcionamiento, y ello se obtiene mediante el texto del artículo 5º del proyecto que está considerando el Honorable Senado y que faculta al Poder Ejecutivo a tal efecto.

Por el artículo 6º se fija en la suma de 1.000.000.000 de pesos (un mil millones de pesos moneda nacional) el crédito de emergencia correspondiente a rentas generales para el ejercicio 1958/59. La ley de contabilidad determina, a través del texto del artículo 5º de la misma, que «la ley de presupuesto fijará un crédito global de emergencia destinado al refuerzo de las partidas contenidas en el presupuesto general que hayan resultado insuficientes, con exclusión de las que se refieren a gastos en personal y a la ejecución del plan anual de obras y trabajos públicos», y es precisamente este concepto el que, por vía de excepción y para el presente ejercicio, se modifica mediante el segundo párrafo del artículo 6º del proyecto en revisión en cuanto establece que el precitado crédito podrá destinarse a reajustar cualquiera de las partidas contenidas en los anexos del presupuesto de gastos que se atiende con recursos de rentas generales, y que el mismo podrá también aplicarse a la creación de nuevos conceptos de inversión.

Tanto la modificación del monto del crédito que se trata como la ampliación de su destino de aplicación se justifican por la inactua-

lidad de las cifras del presupuesto anterior y por la incrementación del régimen de los servicios que el Estado nacional presta como consecuencia de los nuevos planes de gobierno.

Las distintas operaciones de préstamo que ha realizado y aún debe realizar el Poder Ejecutivo como consecuencia de las leyes votadas, cuyos recursos se imputaron al uso del crédito, determinan la facultad que el artículo 7º otorga al mismo para modificar y ampliar el anexo Servicio de la Deuda Pública en la medida de las necesidades. Resulta innecesaria mayor argumentación en esta materia, pues es de toda evidencia que el aumento de la deuda pública trae lógicamente el incremento de los servicios financieros.

El segundo párrafo del artículo 11 del decreto ley 16.990, de 1957, autorizó al Poder Ejecutivo a emitir valores de la deuda pública por un monto de hasta 800.000.000 de pesos moneda nacional, a fin de disponer, con cargo de reintegro, anticipos a las provincias para financiar, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1º de la ley número 14.070, sus respectivos planes de obras y trabajos públicos. Por su parte, la ley 14.461, sancionada en el último período ordinario de sesiones del Poder Legislativo por mediación del artículo 1º, facultó al mismo para disponer la entrega a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con cargo de reintegro, de las sumas necesarias para cubrir los déficit de su presupuesto correspondiente al año 1958.

El artículo 8º del cuerpo legal que estamos tratando amplía el monto de la suma a anticipar por el decreto ley ya citado hasta un importe de mil millones de pesos y actualiza para el año 1959 la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la ley de referencia, en lo que hace a la entrega de fondos para cobertura de déficit presupuestario, con cargo de reintegro. Aquel incremento está determinado por los requerimientos de las obras y trabajos a cumplir en el corriente año, y en cuanto a lo que en la práctica no es sino una prórroga por un año del artículo 1º de la ley 14.461, que mencioné anteriormente, sería del caso repetir los argumentos producidos en el informe pertinente por el colega señor senador Turano en la sesión del 22 de agosto próximo pasado, por todos nosotros conocidos y de suyo suficientemente convincentes.

Por el artículo 9º se retrotrae la aplicación del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, creado y destinado por el decreto ley 2.004 de 1955 y sus modificatorios 9.875 de 1956 y 10.487 de 1957, para los fines originariamente establecidos en ellos, con lo cual la única modificación que se opera sobre el régimen vigente es que dejan de ser destinadas, en parte y tal

como lo estableció el decreto ley 5.383 de 1958, a la Corporación Nordpatagónica.

Según lo dispone el texto del artículo 10, en consideración, quedan derogados los incisos b) del artículo 15 del decreto ley 13.126, c) del artículo 14 del decreto ley 13.128, c) del artículo 13 del decreto ley 13.129 y h) del artículo 16 del decreto ley 13.130, todos del año 1957, por los cuales los directorios de los bancos oficiales, Central, Hipotecario, de la Nación e Industrial, estaban autorizados a fijar los presupuestos de sus propios organismos. Determina, además, con el objeto de dar cumplimiento a disposiciones de la ley de contabilidad, que el Poder Ejecutivo, luego de su aprobación, incluirá en el presupuesto general del ejercicio 1958/59 los presupuestos administrativos de aquellas entidades.

Esta medida responde al buen criterio de respetar la universalidad del presupuesto general de la Nación, y la determinación de efectuarla resulta notablemente plausible en razón de que las disposiciones a derogar impiden que los presupuestos de los organismos citados figuren en la ley anual.

El artículo 11 substituye el artículo 33 de la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto - edición 1943), modificado por el decreto ley 5.169 de 1958, por un nuevo texto que fundamentalmente determina la eliminación del interés máximo del 5 por ciento y la supresión del plazo máximo de 55 años para la amortización, todo ello referido a la emisión de títulos de la deuda pública, y finalmente la autorización al Poder Ejecutivo para realizar las operaciones de financiación transitoria que resulten necesarias, inclusive con el Banco Central de la República Argentina y demás instituciones bancarias oficiales, pudiendo éstas, a tal efecto, utilizar fondos que obtengan de préstamos o colocaciones provenientes del exterior, y convenir con el gobierno nacional en forma independiente y al margen de otras operaciones de crédito que puedan realizar con el mismo, en concordancia con las autorizaciones y limitaciones de sus correspondientes cartas orgánicas.

Es evidente que la emisión de títulos de la deuda pública no puede ser reglada en forma permanente en lo que hace al tipo de interés y a la naturaleza de la amortización, pues son las condiciones financieras de la plaza las que en cada momento dictan su ley, esto es decir imponen por medio de su concurrencia o retracción las posibilidades de éxito o fracaso de una emisión. Y esto que vale para todas las plazas bursátiles y para todas las épocas, es el resorte que ha impulsado al Poder Ejecutivo a promover la reforma citada, que ha sido aceptada por la comisión en razón no sólo de lo expuesto sino también de las saludables consecuencias previsibles para las finanzas del Estado.

Como consecuencia del ordenamiento bancario dispuesto por el decreto ley 13.125/57, de liberación de los depósitos recibidos por los bancos, la Caja Nacional de Ahorro Postal sufrió, hasta el 31 de diciembre del año próximo pasado, determinado quebranto, que tomará a su cargo el Poder Ejecutivo de aprobarse el artículo 12 del proyecto en consideración.

Son varios los factores determinantes del déficit mencionado, y su resumen puede concretarse en tres fundamentales, a saber: diferencia entre el 3 por ciento de interés que los bonos del Tesoro redituaban a la Caja Nacional de Ahorro Postal y el 5 por ciento que ésta abona a los depositantes; retiro de la contribución del 54 por ciento de los gastos que el Poder Ejecutivo realizaba a la Caja, y diferencia entre el valor a que recibió los bonos del Tesoro (93 pesos) la Caja Nacional de Ahorro Postal y el importe a que fueron devueltos los mismos (83 pesos), de un orden de diez puntos.

La mejor comprensión de estos puntos hace necesaria una explicación, aunque breve, de los motivos y la mecánica que les dieron origen. Las escasas disponibilidades del Tesoro frente a sus elevados compromisos, o por mejor decir, su déficit crónico durante los últimos años, hicieron prácticamente obligatorio el concurso del numerario de las instituciones bancarias oficiales, y por imperio de dicha circunstancia la Caja Nacional de Ahorro Postal tomó en bonos del Tesoro del 3 por ciento de interés la mayor parte del importe de los depósitos de su cartera. Al tiempo de así hacerlo, era ésta una operación conveniente para la caja, que abonaba, en concepto de interés en caja de ahorros, entre el 2 y el 2 y medio por ciento, según fuera el monto de los depósitos; además percibía del Estado nacional el importe equivalente al 54 por ciento de sus gastos de funcionamiento para financiar el costo de personal dedicado al movimiento de los depósitos que recibía. Mas he aquí que, de resultas de la modificación del régimen de los depósitos recibidos por los bancos, determinado por el decreto ley 13.125/57, el interés que las entidades particulares comienzan a abonar en cuentas de ahorro se eleva al 5 por ciento, lo cual implica para la caja el riesgo de una corrida si no modifica el suyo en la proporción consiguiente. Así lo hace, poniéndose a la par con la competencia, pero creándose el problema de la pérdida de dos puntos de interés sobre cada peso recibido que tiene prestado al Estado nacional en bonos del Tesoro del 3 por ciento.

Ahora bien; cuando el Poder Ejecutivo entregó los bonos del Tesoro a la Caja Nacional de Ahorro Postal su cotización era de 93, y en el instante en que esta última efectuó la devolución de aquéllos, cumpliendo la operación de normalizar su situación en razón de las disposiciones del decreto ley 13.125/57 aludido, se co-

tizaban a 83, lo cual produce una diferencia de 10 puntos en el monto de la masa de títulos tomados del gobierno.

Todo este análisis justifica la decisión tomada en virtud del artículo 12 de que el Poder Ejecutivo tenga a su cargo el quebranto de aproximadamente 800.000.000 de pesos que la Caja Nacional de Ahorro Postal ha tenido por los motivos enunciados.

El artículo 13 del presente proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo a reducir funciones o empleos de la administración pública nacional en medida compatible con las necesidades de los servicios y mediante una indemnización que para cada uno de los casos previstos en el artículo citado fijará el poder central.

Como consecuencia de la realidad económica de la Nación, el Poder Ejecutivo ha encarado la realización de un plan de estabilidad que presupone, entre otras medidas, el equilibrio del presupuesto general. No obstante las mayores tasas tributarias recientemente sancionadas por el Congreso, es imprescindible realizar importantes economías en los gastos públicos para poder eliminar el déficit previsto para el corriente ejercicio; y como resulta imposible alcanzar los niveles necesarios a expensas del inciso «otros gastos», hácese ineludible que dichas economías se completen con algunas otras que se aplicarán sobre el inciso «gastos en personal» mediante la reducción de agentes previa indemnización.

Esta es la razón de ser de la autorización que se acuerda al Poder Ejecutivo por el artículo 13, que está suficientemente avalada además por la necesidad de adecuar la planta de personal de la administración pública en su número y en su competencia. En su número, porque a los efectos de la racionalización administrativa —contamos actualmente con más de un millón de agentes— el exceso de personal traba el desenvolvimiento de los trámites y lleva a una burocracia inoperante. Y en cuanto a la competencia, es necesario complementar con una medida de esta naturaleza las normas del estatuto del servicio civil para obtener como consecuencia y mediante la selección de los mejores, una elevación en el índice promedio de los conocimientos exigibles al agente.

Estimo imprescindible destacar, contrariamente a lo que se ha dicho, que de ninguna manera se producirán cesantías en masa. No podrían producirse tales cesantías porque irían en contra de los postulados de la Unión Cívica Radical Intransigente, que en su ideario ha proclamado un afán de justicia para todos los servidores públicos. No podrían de ninguna manera producirse cesantías en masa y en ninguna forma indiscriminada por una sencillísima razón: porque este plan no será aplicado sino en el momento en que el programa de estabilización económica y de desarrollo industrial que

propugna el gobierno nacional esté en plena ejecución, de tal forma que todo lo que se reduzca por un lado será absorbido por el otro. Se producirá así una redistribución de la mano de obra, pero no desocupación, y ello permitirá que la gente que no produce pero consume, como es la burocracia, modifique su situación produciendo para el bienestar general. Sin perjuicio de que, en algunos casos especiales, como constituyen las empresas del Estado, en las que revista casi el 30 por ciento de los servidores de la administración pública, será posible obtener no sólo el equilibrio presupuestario sino también tender paulatinamente al mejoramiento de los servicios por vía del tan necesario reequipamiento de material.

Por otra parte, las condiciones que deberán llenarse para proceder a la eliminación del personal excedente son una garantía de que el procedimiento se hará estimando justa y equitativamente las condiciones personales de cada agente, de manera que pueda asegurarse que la medida pasará por un filtro que impedirá todo carácter de injusticia.

Es conveniente y justo aclarar y proclamar en voz alta el sentido de la interpretación que da esta Cámara, y sobre todo la comisión en cuyo nombre informo, sobre la forma en que deberá actuarse en lo que se refiere a la reducción del personal. Hemos tenido la visita de infinidad de servidores públicos, agrupados especialmente en la ATE, que están preocupadísimos por esa situación, porque ellos quieren colaborar para que se aplique esta reducción del personal con un sentido de estricta justicia.

Finalmente, debo decir que la comisión ha recibido y escuchado a varios dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado —como ya lo dije anteriormente— que hicieron una serie de consideraciones sobre el artículo a que me estoy refiriendo y pusieron de manifiesto esa inquietud que conviene recalcarla y que nos preocupa a todos. La comisión ha considerado conveniente, como una garantía más de equidad, exteriorizar sus deseos en el sentido de que vería con agrado y como una necesidad que al dictarse la reglamentación del presente proyecto, el Poder Ejecutivo autorizara la intervención de los representantes gremiales de los servidores del Estado en los casos de aplicación del artículo 13. Y lo hace así porque entiende que interpreta con ello el sentir de todos los señores senadores y, además, por considerar inconveniente el procedimiento de modificar el texto del artículo en cuestión, lo que obligaría a la devolución del proyecto a la Honorable Cámara de Diputados, con el riesgo subsiguiente de que no se obtenga su sanción inmediata imperiosamente exigida por el resto del articulado de la ley en razón de la extrema urgencia de las medidas que involucra para el normal funcionamiento administrativo.

La mayoría de las disposiciones de esta ley tiene una única orientación, como ha podido observarse, que es permitir el desenvolvimiento de la administración pública en este momento transitorio de la vida económica del país, tal cual ha quedado claramente expresado en este recinto al considerarse las modificaciones al sistema impositivo. Tanto es así que las normas que modifican nuestro sistema presupuestal mantendrán su vigencia hasta tanto el Congreso se aboque al estudio y consideración de la ley general que habrá de reemplazar las autorizaciones que se prorrogaron y se hallan actualmente en vigor.

Creo, señor presidente y señores senadores, haber abundado, en función de la importancia de la materia y en razón del tiempo disponible, lo suficiente como para dejar esclarecida la parte substancial de los diversos tópicos que trata el proyecto en revisión y para solicitar el voto afirmativo de los señores senadores en pro de su sanción, en nombre de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que ha tenido la gentileza de conferirme la delicada misión del presente informe. Nada más. (*Aplausos en las bancas.*)

Sr. Nogueira. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Nogueira. — Señor presidente: estamos legislando con el propósito de encauzar al país por una senda que ha de llevarlo a realizar su destino histórico. Para ello es necesario a veces apretarse el corazón, dejar de lado conceptos que en algún momento pudieron parecer inamovibles y enfrentarse con los factores que regulan la popularidad; pero debemos hacerlo, y hacerlo con la conciencia plena de que estamos sirviendo al interés superior de la Nación, ante el cual caducan todas las posiciones personales. Así debe ser y así lo señala nuestra condición de argentinos y de radicales intransigentes.

Estimo que con esta ley no vamos a lesionar los intereses de nadie ni menoscabar los derechos adquiridos por los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones: el instrumento legal que vamos a sancionar ha de ser empleado con serenidad de juicio y con la cautela indispensable para evitar convertirlo en un instrumento de tortura. Debe integrar el mecanismo del plan de estabilización nacional en perfecta y total armonía con el mismo; por lo tanto no se ha de transformar en un elemento perturbador, y esta circunstancia anticipa la seguridad de que su sanción no constituye una amenaza para la tranquilidad de nadie y de que su aplicación, en su caso, no será indiscriminada.

Tendrá que producir, indiscutiblemente, reacciones en los afectados, quienes le darán la tónica adecuada conforme al interés personal de cada uno, para encontrar eco en los sectores obstinados en su propósito de crear dificultades al gobierno. Pero a poco que se analice la cues-

ción se verá que las medidas que se propugnan no pueden causar perjuicios a nadie, ya que sólo se procura aliviar a la administración, en primer término, de aquellos agentes en condiciones de jubilarse, de otros que desempeñan más de un cargo —y aquí influirán las disposiciones que reglan las incompatibilidades—, y para el saldo de excedentes se establecen las indemnizaciones compensatorias, lo que significa que nadie quedará en la angustiosa situación aquella con que los críticos sistemáticos pretenden ensombrecer el panorama cuando aluden, con énfasis mayúsculo, a la posibilidad de «cesantías en masa», fantasma terrorífico con el que pretenden retrotraer la memoria del pueblo a las trágicas épocas de los gobiernos reaccionarios.

El país ha sido llamado a la realidad por el señor presidente de la República, quien ha expuesto, sin preámbulos ni atenuantes, la sombría perspectiva que se abre al país si se continúa la política de despilfarro que, basada en un falso optimismo alentado por quienes sólo buscan su provecho de una vida ilusoriamente fácil, ha venido desarrollándose desde hace varios lustros. La historieta fantástica, que ilustradores avezados vinieron desarrollando para halago de la población, ha tocado a su fin, y quienes tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de la hora debemos pensar y actuar de modo acorde con quien ha dado la voz de alerta y señalado el camino, el único camino que en las actuales circunstancias queda abierto hacia un rumbo cierto: hacia la estabilización económica por la que —indefectiblemente— vamos a desembocar en el anhelado estado de prosperidad, de efectivo progreso social y económico sobre cuyos pilares se asienta la verdadera soberanía de una nación.

Entiendo, señor presidente, señores senadores de la República, que nos estamos poniendo en marcha con tremendo instrumento arrasador. Muy lejos está de nuestro ánimo sumar al sacrificio que hemos de realizar entre todos, penurias a un sector de la población. Las medidas que se aplicarán, por algunas de las disposiciones de esta ley, importan la parte que corresponde aportar a la administración pública en el reajuste de gastos, en la economía de recursos que nos impone a todos la situación crítica que hemos heredado; significa retirar de la mesa de cada hogar argentino a un invitado forzado y permanente de estómago robusto, que no importa mantener cuando los tiempos son de holgura, pero que hoy, cuando el ama de la casa deberá hacer gala de todos sus recursos de ciencia doméstica en la lucha contra la exigüidad de los medios económicos, se ha convertido en un fardo demasiado pesado, insoportable y odioso.

Queremos llevar nuestro país a tiempos de abundancia y felicidad; queremos que todos y cada uno comprendan y se identifiquen con

nuestro afán; queremos ser justos cuando imponemos obligaciones dictadas por la necesidad; queremos que todos y cada uno asuman por un instante la condición del labriego que, tras el duro trabajo de la rotura y siembra del surco, debe vivir ese periodo de angustiada esperanza en que el corazón se achica, en que el apremio oprime y el futuro oscila alto y lejano, pendiente de los imponderables, para que comprendan, en amplitud universal, el porqué de ese hálito de bendita exuberancia, de serena felicidad y de gracia infinita, que trasciende de la espiga en sazón, del canto del segador y de la dorada hogaza de pan. Nada más. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Guido). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar, en general, el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración en particular.

Sr. Biaín. — Señor presidente: como todos los señores senadores tienen sobre sus bancas el texto del proyecto de ley que estamos considerando, hago indicación para que solamente se enuncie la numeración de los artículos en lugar de leerlos íntegramente.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Guido). — Habiendo asentimiento, así se procederá.

—En particular es igualmente aprobado el proyecto de ley.

Sr. Presidente (Guido). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se efectuará la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo.

13

MOCIÓN

Sr. Presidente (Guido). — De acuerdo con la comunicación de la Honorable Cámara de Diputados, de que se ha dado cuenta al informar sobre los asuntos entrados, corresponde que el Honorable Senado proceda a integrar la comisión bicameral encargada de estudiar las medidas pertinentes para enjugar el déficit de explotación de los ferrocarriles del Estado argentino.

Sr. Rica. — Formulo moción para que se faculte a la Presidencia a designar a los senadores que integrarán la citada comisión bicameral.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Chubut.

—Se vota y resulta afirmativa.